



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

79321/2016

DIVISION AGRICOLA S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I. Contra la Resolución DI CRSS registrada bajo el nro. 741/15, que desestimó el recurso de revisión deducido contra la Resolución 8/15, el contribuyente dedujo recurso de apelación.

Elevadas las actuaciones, con carácter liminar a la apertura formal de la instancia –habiéndose interpuesto dentro del plazo previsto por el art. 9 de la ley 23.473, modificado por las leyes 24.463 y 26.063-, corresponde verificar el cumplimiento del recaudo establecido por el art. 12 de la ley 21.864, 26 inc. b) de la ley 24463 y arts. 15 segundo párrafo de la ley 18.820 y 6 punto 1) de la resolución 877/92 (ANSeS).

A propósito de ello, en el escrito de recurso, el apelante plantea la exención de cumplimiento de la mentada obligación atento la imposibilidad de afrontar el pago del “solve et repete”, aduciendo la desproporcionalidad con la capacidad económica de la empresa y el perjuicio que le generaría el pago del importe exigido

El Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades, que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), existen situaciones que admiten la apertura de la instancia judicial sin el mentado depósito. Así ha considerado que se enmarcan en la hipótesis de excepción: a) desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV); b) el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101); y c) cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia en tanto en el sub examine surgen, observados con criterio amplio, elementos suficientes que dan cuenta de la imposibilidad de ingresar el depósito previo, habrá de admitirse la apertura de esta instancia.

II. Que en orden a la crítica vertida contra la sanción impuesta se alza en primer término por la negativa de la administración a considerar los elementos subjetivos que determinaron la imposibilidad de ingresar los pagos en la oportunidad prevista. Sostiene que la mora incurrida en el pago responde a la situación económico financiera de la firma y que para el caso se debió efectuar "al menos una consideración subjetiva e incluso eximir la sanción".

Ha de señalarse, con carácter liminar, que en el caso de multas derivadas del incumplimiento de las obligaciones para con los sistemas de seguridad social, la sola



constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. El elemento subjetivo no tiene relevancia, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte.

La RG 1566, no es una norma penal, sino que se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la Ley N° 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma y tiene por finalidad castigar el ingreso tardío de los aportes necesarios para el financiamiento del sistema.

Dicha norma establece que una vez verificada la infracción, se aplica una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa en relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado, sin atribuir relevancia a las circunstancias de hecho de índole subjetiva para eximir o atenuar la multa correspondiente (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.07.07 -y aclaratoria del 17.05.07-, "Urbani, Ricardo Luis"). Es decir, comprobada objetivamente la comisión de una falta, carece de entidad la consideración del aspecto subjetivo, en tanto en las contravenciones o infracciones fundadas en el Poder de Policía del Estado y las relacionadas con la Seguridad Social no se requiere "culpa" o "dolo" en el infractor, criterio éste que deviene de la literalidad de la norma (ley 17.250). (Cfr. Sala 1 en autos "Industrias Montecarlo S.A. c/ A.F.I.P.-D.G.I s/ Impugnación de deuda", sentencia definitiva 122542, del 18/10/07).

En cuanto a las posibles causales exculpatorias validas, tampoco es relevante la existencia de dificultades económico-financieras, derivadas de circunstancias atinentes al desarrollo del giro empresario o de la actividad desarrollada por la empresa.

Si bien podría no descartarse que la situación económica de la empresa pudo haber incidido en el efectivo cumplimiento de estas obligaciones, ello por sí sólo no es causal exculpatoria suficiente, si no se demuestra también el simultáneo agotamiento de las gestiones para obtener, en debida fecha, la asistencia financiera que le permita afrontar las obligaciones previsionales.

Finalmente, la recurrente plantea de irrazonabilidad de la RG 1566 AFIP, y 15 de la ley 17.250 en cuanto en su estimación se incurre en exceso de punición que colisiona con el principio de razonabilidad.

La garantía de la defensa en juicio está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que solo pueden ser constitucionalmente impugnadas cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad (C.S. diciembre 3-1991 Del Val, Ricardo J.), situación que no se configura en autos.

Atento que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal configura un acto de suma gravedad institucionalidad, "ultima ratio" del orden jurídico, por lo que su planteo debe contener un sólido desarrollo argumental y fuertes fundamentos para que prospere, debiendo demostrarse claramente de qué manera aquella contraría la Constitución Nacional, no bastando las meras citas de las normas trasgredidas y, que la recurrente reconoce expresamente haber realizado una infracción de carácter objetivo,- mora en el depósito de aportes y contribuciones- siendo el fin jurídico sancionar el ingreso tardío de aportes y contribuciones al sistema cuando ha fracasado el efecto disuasorio que entraña la amenaza de sufrir un mal mayor- la pena - a fin de asegurar el cumplimiento eficaz de los mismos (CFSS, Sala II, sentencia 72246 del 28/8/98 en autos: "Diesel Oliden S.A c/ DGI"), por lo que corresponde desestimar dicho planteo.

En atención a los fundamentos expuestos, el Tribunal :**RESUELVE** 1) Declarar formalmente admisible el recurso deducido, disponer su rechazo y confirmar la resolución cuestionada en cuanto ha sido materia de agravios; y 2) Sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 RJN).

